



DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE



Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia

Inscrita en el Registro de la Xunta de Galicia **R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015**

A la atención: **Presidencia de la Xunta.**

Alberto Núñez Feijóo.

Presidente de la Xunta de Galicia

- Secretaría Técnica del Presidente

Asunto: SOLICITUD de INFORMACIÓN FEDATADA SOBRE EL ESTADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN de todos los contratos, convenios, adjudicaciones desde el año 2012 sobre los que haya intervenido la alto cargo del PPdeG Sra María del Mar Sánchez Sierra en la SECRETARÍA DE MEDIOS, FUNDACIÓN CAMILO JOSE CELA, RETEGAL, AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA, todos ellos bajo gestión de fondos públicos. 11-12-2018-Solicitud-PX006A-20181211, Xustificante-PR004A-20181021...

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa del entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com , cuya acta de poder consta en el registro general de asociaciones de la Xunta de Galicia comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

"el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación".

SOLICITAMOS INFORME COMPLETO, FEDATADO en formato digital al objeto de trasladar los hechos al Tribunal de Cuentas y Comunidad Económica Europea **por Dilación indebida en los procedimientos administrativos solicitados sobre el INCUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN SOLICITADA SOBRE LOS ACTOS Y GESTIONES REALIZADOS POR LA SRA DOÑA MARÍA DEL MAR SANCHEZ SIERRA, ALTO CARGO DE CONFIANZA DEL PPDEG EN LA XUNTA DE GALICIA CUYA RESPONSABILIDAD AL FRENTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIOS, PATRONA FUNDACIÓN CAMILO JOSE CELA, VICEPRESIDENTA DE RETEGAL, VOCAL AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA; TODOS ELLOS DEPENDIENTES DE SU NOMBRAMIENTO COMO ALTO CARGO DE CONFIANZA DEL PPDEG.**

El reiterado incumplimiento dentro del proceso administrativo en el que pretende el responsable sumergirnos bajo sus elevados costes, solo confirma el alto grado de "endogamia" colaboración e intencionalidad partidista de la colaboración permanente para

ocultar los derechos que legalmente nos pudiesen corresponder que van más allá del contencioso administrativo y en el que se da esta solicitud, que no es otro que el de acudir a órganos de control sobre los recursos públicos e inclusive ante la misma Comunidad Europea y sus parlamentarios en demanda de nuestros derechos, sistemáticamente vulnerados en el alto cargo en la Presidencia de la Xunta de Galicia.

Recordamos que la actuación de la Administración está sometida a las exigencias del respeto al ordenamiento jurídico y dirigida a la satisfacción de los intereses generales, en cuyo desarrollo no puede desenvolverse al margen de las reglas jurídicas, incurriendo tanto si el actuar de la Administración se realiza si haber adoptado decisión declarativa que le sirva de fundamento jurídico o esta es nula como si la actuación no respeta, por extralimitación, los elementos esenciales del procedimiento.

En tales casos incurre en la llamada vía de hecho, construcción del Derecho Administrativo francés, y que encuentra acomodo en nuestra legislación; en concreto en la Ley 29/1998, del 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (arts. 25 y 30) y en la Ley 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, (art. 125).

Control, Vía de hecho, Interdicto, Impugnación.

Entre los distintos mecanismos que el ordenamiento jurídico ofrece para que la actuación de la Administración sea objeto de control en el ámbito de la actividad administrativa impugnabile ante la jurisdicción contenciosa o cualquier otra que sirva de base al derecho, se presenta una limitación en la actuación ejecutiva de la Administración cuando se realiza al margen del procedimiento, generando la denominada "vía de hecho".

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 29/1998, de 13 de julio (LJCA), establece la actividad administrativa impugnabile, (art.25) que "el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley, su art. 30 LJCA permite que "en caso de vía de hecho, el interesado podrá

formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo”.

En toda actuación la Administración debe estar sometida plenamente, según preceptos constitucionales, a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE) quedando sujeta a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), prohibiéndose la arbitrariedad en su actuación (art. 9.3 CE), y por ello la “actuación de las Administraciones públicas sujetas al derecho administrativo” (art. 1 d/ LJCA) que configura el ámbito jurisdiccional contencioso-administrativo, se comprendan (Exposición de Motivos de la Ley 29/1998 y STS 1 de Julio de 2010) aquellas actuaciones de la Administración que constituyen simples vías de hecho, que albergarán “tanto la actuación material de las Administraciones Públicas que se produzcan sin haber adoptado previamente una decisión declarativa que le sirva de fundamento jurídico como aquella otra actividad material de ejecución que excede evidentemente del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo” (STS de 22 de septiembre de 2003), de manera que, la vía de hecho, o actuación administrativa no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación, se produce, según tiene declarado el Tribunal Supremo, no sólo cuando no existe acto administrativo de cobertura o éste es radicalmente nulo, sino también cuando el acto no alcanza a cubrir la actuación desproporcionada de la Administración, excediendo de los límites que el acto permite.

La normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, supone una “reacción enérgica”(2) contra la llamada “vía de hecho”, por producirse un ataque a derechos e intereses sin acomodarse a los límites normativos o procedimentales. Vulneración que supone un atentado contra el propio Estado de Derecho, que se ve conculcado desde el momento que la actuación material de la Administración se efectúa sin un acto previo que la legitime. Exigencia del Estado de Derecho que remarcaron las SSTs 4 de Noviembre de 1982, 15 de Diciembre de 1995 o 18 de Octubre de 2000.

En el marco de garantías constitucionales, concretada en el art. 33.3 CE, al establecer que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes” y ya que la propiedad no es un derecho ilimitado, (art.349 del Código Civil “nadie podrá ser

privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización. Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado") se condiciona el ejercicio de la expropiación a causas y requisitos determinados, y habilita, en caso de incumplimiento de éstos, mecanismos de reacción para el particular afectado para garantizar su tutela judicial efectiva. Protegiéndose el principio de legalidad para salvaguardar el derecho de propiedad en normas internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Sentencia del Tribunal Europeo de 30 de mayo de 2000).

Esta figura de la "vía de hecho", como novedad de la LJCA, es considerada por García de Enterría, como cualquier actividad material de la Administración que, afectando de hecho a cualquier "interesado" (art.30 LJCA), no esté cubierta por un acto administrativo previo; lo que supondrá una vulneración del principio que consagra el art. 93 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) según el cual "Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico". En ese sentido que este art.30 de la LJCA prevea un procedimiento para combatir aquellas actuaciones materiales de la Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos o intereses legítimos de cualquier clase, convirtiéndose, por tanto, el procedimiento de la vía de hecho en un medio de obtener la cesación de una actuación administrativa material, ajena a un auténtico acto administrativo y sin la fuerza legitimadora de dicho acto (STS de 17 de febrero de 2007)

La interpretación constitucional (STC 22/1984, de 17 de febrero) generan una situación constitutiva de vía de hecho "los actos de los funcionarios y de los agentes de la Administración faltos de cobertura legal y de cobertura concreta en un título jurídico".

La jurisprudencia SSTs de 13 de septiembre de 1983, 11 de octubre de 1983, para determinar la nulidad de pleno derecho, por el olvido de trámites esenciales sin los que dicho procedimiento es inidentificable, y así evitar que se consoliden resultados que constituyen, proclama el Tribunal Supremo, desafuero, demasía o abuso.

Si se prescinde totalmente del trámite será procedente el ejercicio de las acciones interdictales contra actos cometidos por la Administración, calificados de perturbatorios o de despojo,

saliéndose de la competencia atribuida o infringiendo sustancialmente las reglas que gobiernan su actuación.

En este sentido señala la STS de 7 de febrero de 2007: "la finalidad de la vía de hecho articulada en la nueva Ley de la Jurisdicción responde a la intención del legislador de no dejar sin cobertura jurídica y tutela judicial a las actuaciones materiales de la Administración que, sin procedimiento administrativo y la cobertura de un acto de este carácter, perturbe el ejercicio de sus derechos por los particulares, al objeto de obtener la cesación de esa ilegítima actividad material por parte de la Administración". Resultando protegido el art. 24 CE, desde el momento en el que, encontrándonos en una situación constitutiva de "vía de hecho", no es aplicable el plazo de prescripción establecido para la acción encaminada a exigir responsabilidad patrimonial de la Administración (STS 22 de febrero de 2000).

Solicitamos informe sobre el estado de las actuaciones sobre el procedimiento que se dice en la solicitud de FISCALIZACIÓN de todos los contratos, convenios, adjudicaciones desde el año 2012 sobre los que haya intervenido la alto cargo del PPdeG Sra María del Mar Sánchez Sierra sobre los entes SECRETARÍA DE MEDIOS, FUNDACIÓN CAMILO JOSE CELA, RETEGAL, AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA, todos ellos bajo gestión de fondos públicos.

SUPLICO:

Se atienda lo solicitado, se proceda a REMITIR informe cuya firma este documentada por la Presidencia de la Xunta de Galicia y Consellería de Facenda..

Se solicita, IDENTIFIQUE AL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO PARA INICIAR LOS TRÁMITES LEGALES DE RESPONSABILIDADES PÚBLICAS QUE NOS PUEDAN CORRESPONDER ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

Presidente Pladesemapesga:



Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia

<https://rgi.cnmec.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el

Número Registro: 539622127908-83

europa.eu

<http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=>